

Creencias constitucionales, cultura del atajo y política de barrio.

En Colombia hemos sufrido cierta fascinación por capos, comandantes, jefes y líderes en general de la violencia y la política, a los que les asignamos (culturalmente) el atributo de estar moviendo los hilos de nuestro destino (del destino de la sociedad colombiana). Quisiera revisar y en éste caso en Cartagena, cómo las víctimas, como la más frágil fracción de las mayorías, sin caer en la falta de tino para renombrarlas como culpables, han sido responsables de la corrupción, de las redes criminales y de la regulación social violenta en general.

En un barrio periférico de Cartagena uno puede encontrarse con personas que manejan saberes precisos y complejos que les han permitido sobrevivir, sin embargo, son colombianos que han percibido la política como un negocio que no está exento de la violencia (del poder de las armas), mujeres y hombres que entienden al político y al gobernante como a un doctor, un patrón con el que se pueden lograr ciertos acuerdos, pero frente al cual, sobre todo, se debe apostar a que sea caritativo, a que le pague bien los favores electorales al barrio.

Ser clientela política acerca más al poblador a la condición de súbdito *beligerante* (que se queja, que reclama, que regatea según el compromiso de su voto) que a la de un ciudadano *gracioso*, es decir, un ciudadano inerte que aunque vote asume el señorío del gobernante de tal modo que le parece imposible ejercer el control político. De este modo, en Cartagena, tenemos un habitante político que sustancialmente no es ciudadano dada su relación con los gobernantes. Sin embargo, aún peor, es un poblador que ha venido siendo consumidor de la seguridad de grupos ilegales que terminan operando como el tirano de esquina, pero que también son justificados por viabilizar un espacio de convivencia, porque al final de cuentas, ellos habilitan unos derechos mínimos, que no son más “naturales” que otros, pero corresponden a la cultura política de éstos pobladores, donde un gran eje, como valoración, es la propiedad como la forma por excelencia de ser parte de una vecindad y con ello de un pueblo. El poblador no ha desarrollado una creencia activa en una mejor comunidad, donde más allá de la seguridad, se estime una sociedad regida por los valores de la libertad para agremiarse, pensar y expresarse; además de la ausencia de conceptualización de las bondades de un juicio justo (el debido proceso) y de lo público como una prohibición para que los caprichos de la autoridad y sus intereses prevalezcan sobre el bien común, el simple hecho de que haya una autoridad incuestionable frente a la cual se pueden tener ciertas certidumbres es suficiente. La seguridad, el ascenso social y el prestigio que hace sentir el dinero; la venganza y las urgencias económicas, han determinado los valores en los barrios de la miseria de Cartagena, donde unos habitantes se enfrentan a un Estado que poco liderazgo ejerce en su vida y una pobre solución ofrece frente a sus expectativas. Y para los habitantes de esa Cartagena, la grande pero débil, la ciudadanía y democracia no aparecen como conceptos experimentados, ni en su historia, ni en la historia de sus familias, de sus pueblos e inclusive de las regiones de las que fueron desplazados.

En la próxima fecha electoral pobladores periféricos que han sido tratados con injusticia, y que han vivido en una Colombia que les ha demostrado que la violencia automática es una opción para la regulación social y la política es un escenario de preeminencia del más fuerte, podrán de nuevo ejercer un rol. Sin embargo, debido a las dificultades por las que han tenido que pasar los pobres históricos que han descendido hasta el suelo mismo de la miseria y todos los desplazados, los atajos como caminos no

institucionales que también son tomados por políticos y autoridades, la consigna, que se traduce en acciones particularmente egoístas, va a ser la de ¡sálvese quien pueda!

Los derechos de autor (el copyright) de lo *para*, no son de los jefes, hoy visibles por “el proceso de paz”, es algo mucho más viral, mucho más plural en la medida en que se asienta en la conciencia social y la cultura política de muchos en Colombia, lo que explica como en barrios de Cartagena, el poblador más desprovisto de poder puede montar su franquicia, primero valiéndose de amenazas y *listas negras*, en un terreno abonado para el miedo y la paranoia, y luego por lo más sencillo de hacer, siendo la treta del débil por excelencia, la cobardía del colombiano: matar un vecino y así, “demostrar su poder”.

Para el próximo 28 de octubre puede ser ingenuo pensar que las mayorías lograrán cerrar filas frente a una opción opuesta a los corruptos, politiqueros y violentos, pero sin duda también encuentro bastante ingenuo pensar que esto nunca va a cambiar y que cartageneros o colombianos (en otros municipios) van a permitir que prevalezca una política de los favores frente a los derechos, donde el elector es estafado una y otra vez. El elector cartagenero cada día debería de tener más claro que en la política de la ciudad, el político, el hombre armado y el *personaje del billete*, se unen en el mismo negocio electoral como un equipo o una misma persona que se precipitan en los tres grandes delitos de la política: la compra de votos (manipulación electoral), la corrupción (mala adjudicación de contratos, incumplimiento a los topes económicos de campaña e “inversión” en la política esperando sacar ganancias) y la eliminación física (o amenaza armada): nuestra santísima trinidad de perdición a la colombiana. Dentro de los candidatos a la alcaldía pueden estar aquellos que acoliten (y hasta patrocinen) un *stato quo* sombrío donde el mafioso y *paraco* siga imperando como autoridad de facto en ciertos espacios de la ciudad, llegando así a un modelo de sociedad sin democracia donde en vez de Estado tenemos tiranos “cuidándonos” y en vez de representantes tenemos patrones repartiendo las migajas que deja la corrupción. Conozco cómo el cartagenero de un barrio periférico ha precipitado el cambio en la dirigencia armada, facilitando la eliminación del jefe *para*, también sé cómo éstos colombianos logran que se facilite el traslado de la red clientelista de un politiquero a otro, por ello es claro que esos pobladores invisibles (subestimados por los generadores de opinión), tienen un poder que ha sido mal dirigido, que obedece a una cultura política, incompatible con nuestra constitución.

Lukas Jaramillo Es.